

Chile Latente, 2020

Mario Garcés D.¹

Chile ha vivido una sucesión de coyunturas críticas: el Estallido social del 18 de octubre que abrió una fase de movilización social y de crisis en el Estado; los efectos de la pandemia del coronavirus que instalaron la crisis sanitaria; y, en el marco de estas dos crisis precedentes, se han instalado los efectos de las medidas sanitarias sobre la economía, con un creciente número de trabajadores cesantes y la emergencia del hambre en un pueblo pobre que no puede salir a trabajar la calle, como es su modo habitual de sobrevivencia.

La debilidad del Estado, el autoritarismo y la represión como salida

El Estado ha demostrado su debilidad en todas las fases críticas que se han sucedido desde octubre de 2019 a la fecha. En la primera etapa frente al Estallido, el gobierno, sin comprender la profundidad histórica de la protesta social, actuó tarde y a destiempo, como si se tratara de una alteración del orden público, con visos terroristas. Entonces, el presidente, recurrió a una frase acuñada por el ex dictador, “estamos en guerra” (le faltó solo agregar “señores”, como lo hacía Pinochet). Sin embargo, al poco andar, el movimiento social le fue imponiendo su agenda, que por supuesto no era la de la guerra.

El gobierno de Piñera fue casi siempre reactivo y los alcaldes, con su convocatoria a una consulta, adelantaron parcialmente el plebiscito mientras que el parlamento solo actuó cuando el gobierno estaba al borde del colapso. Vino en su auxilio buscando recomponer alguna dirección en el Estado y el control sobre la sociedad (el famoso Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019). Reestablecido un cierto orden “en las alturas”, el gobierno y el parlamento concordaron una serie de leyes represivas (anti saqueos, anti barricadas, etc.) para conjurar nuevas formas de protestas social (que ya hoy comienzan a ponerse en práctica).

En la coyuntura de la crisis sanitaria y de los efectos del confinamiento sobre la economía, las conductas del gobierno se han demostrado nuevamente erráticas, ambiguas, sino reactivas. La tensión entre crisis sanitaria y crisis económica ad portas, lo llevó a demorar las medidas preventivas (suspensión de clases y cierre del comercio, que le impusieron los alcaldes); luego dotó de supra poderes al Ministerio de Salud que puso en práctica su estrategia sin consultas y con poca capacidad de escucha; cantó victoria tempranamente anunciando un “retorno seguro” a una “nueva normalidad” que duró un poco más de una

¹ Historiador, docente de la Universidad de Santiago de Chile. Director de ECO, Educación y Comunicaciones. Miembro del Comité Editorial de LOM Ediciones

semana y se derrumbó cuando se dispararon los contagios. Solo entonces, se impuso la cuarentena total para Santiago, la que en pocos días abrió dos nuevas grietas: el hambre en las poblaciones y el eventual colapso del sistema de salud.

Se podría hacer el inventario de las medidas económicas anunciadas y su puesta en marcha (Protección del Empleo, Bono Covid19; Salvataje de las PYMES; Ingreso familiar de Emergencia, distribución de 2,5 millones de cajas de alimentos) en que la tónica neoliberal es manifiesta: se actúa sin afectar a las grandes empresas (incluso, en algunos casos se busca favorecer); la Protección del Empleo, se hace recurriendo al Fondo de Cesantía de los propios trabajadores; el primer bono Covid19 de abril fue francamente mezquino (50 mil pesos); el apoyo a las PYMES lento y burocrático buscando el acuerdo con la banca privada; y el anuncio de las 2,5 millones de cajas de alimentos se hace sin disponer de la logística adecuada para iniciar tamaña empresa. El presidente Piñera actúa como empresario que especula, cree que basta con hacer los anuncios para que la realidad se modifique, cuando en realidad lo que se requiere es eficiencia y credibilidad, ambos componentes de los que el Estado chileno de hoy cuenta en un muy bajo grado.

Débil legitimidad y débil capacidad para actuar en el campo social en medio de una emergencia nacional. Un ejecutivo errático y reactivo, un parlamento carente de iniciativa, poder y liderazgo; unos municipios empobrecidos y reducidos al protagonismo personal de los alcaldes, pero que, sin embargo, vinieron a suplir la debilidad del Estado y hacer visible su mayor cercanía con las demandas ciudadanas. Y, todavía más, unos servicios públicos con escasos recursos y sometidos a alta presión producto de la crisis. Todo ello, en el contexto de una sociedad estructuralmente desigual que a pocas semanas del confinamiento social hizo emerger su peor cara: el hambre y el abandono de los más pobres.

Sin embargo, desde un punto de vista histórico y cultural, el Estado chileno cuenta también con sus propios recursos, especialmente sus tradiciones autoritarias y el recurso a la represión cuando el orden se ve amenazado. Durante el Estallido Social, la fuerza de choque fue Carabineros que sumó a su historia una nueva fase de violación sistemática de los Derechos Humanos; luego el recurso autoritario del parlamento que validó una salida inconsulta a la crisis y aprobó nuevas leyes represivas; finalmente el “estado de emergencia sanitaria” que se decreta para ordenar el Estado y disponer de militares en las calles y toque de queda.

Vivimos en Chile hoy una suerte de “estado de emergencia”, tanto real como simbólico, donde todo el poder se concentra en la cúpula del Estado, los Ministerios, especialmente el de Salud, la policía, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación funcionales al discurso oficial (con escasa y una muy débil capacidad crítica). No hay contrapesos como en la dictadura de Pinochet, cuando la Iglesia Católica de ayer, no la de hoy, jugó un papel en la contención de la pobreza y de contra punto social y político con el régimen, ni partidos políticos que buscaban dar forma a la resistencia.

El cuadro de hoy es el de un neoliberalismo sometido a prueba por la debilidad política del Estado, aunque con capacidad de sobrevida dado el enorme poder acumulado por el empresariado nacional y la del debido orden de los aparatos coercitivos del Estado, puestos todos a su servicio. Hay que tener en cuenta, sin embargo, también, la eficacia de los “aparatos de hegemonía” que refuerzan el ancestral “sentido del orden” de los chilenos, entre otros, el poder de los medios de comunicación y el de las asociaciones civiles y políticas que lo sostienen, incluidos los dirigentes políticos tanto de gobierno como de oposición.

Las fortalezas y debilidades del movimiento social

La principal fortaleza del movimiento social es que tomó en sus manos el “interés general” o el “bien común” al que aspira la mayoría de los chilenos, movilizándose masivamente a partir del 18 de octubre de 2019, creando nuevas organizaciones –como las Asambleas Territoriales- y potenciando las precedentes que se venían gestando y ampliando desde los estudiantes –especialmente secundarios, con la ACE-; el feminismo –con todas sus variantes y articulados en el 8M-; los colectivos y grupos ambientalistas –especialmente los que luchan por el agua-; los mapuche, con sus nuevas formas de lucha y sus diversas expresiones sociales y culturales; los profesores, animados por nuevos dirigentes; el Movimiento NO + AFP, que ganó gran desarrollo desde 2016; y el sindicalismo viejo y de nuevo cuño, ciertamente con más dificultades, pero un actor relevante.

La mayor novedad que produjo el Estallido Social de 2019 es que sin generar una articulación orgánica estable o permanente, logró sumar a la diversidad y que sus distintos componentes no solo se movilizarán, sino que iniciarán procesos democráticos de deliberación “desde las bases”. Es importante retener esta triple práctica: **de movilización, de organización y de deliberación**, ya que a partir de estas prácticas se acumula *capital social* y se fundan las posibilidades de elaboración de un nuevo proyecto político.

Cada una de estas prácticas tiene sus propios fines, la movilización visibiliza a los diversos actores y movimientos ocupando la calle (lo que más teme el gobierno, ya que estima que “altera el orden público”); la organización reconstruye el tejido social, moviliza “recursos propios” y asegura la continuidad de los movimientos; la deliberación, termina de configurar a los grupos organizados y movilizados en “sujetos políticos” en sentido estricto, ya que como indicó Paulo Freire:

La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres (y mujeres) transforman el mundo. Existir humanamente, es “*pronunciar*” el mundo, es transformarlo. El mundo *pronunciado*, a su vez retorna problematizado a los sujetos *pronunciantes*, exigiendo de ellos un nuevo *pronunciamiento*.

Los hombres (y mujeres) no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”²

El Estallido tuvo también un efecto sinérgico, sumó a otros, especialmente jóvenes no siempre implicados o renuentes a la acción política: los jóvenes ex SENAME, las “barras bravas”, jóvenes profesionales de la clase media, colectivos de arte, y muchos otros que se organizaron al calor de la movilización “*hasta que valga la pena vivir*”³ como algunos de ellos rayaron en las calles de Santiago y de provincias.

En artículos anteriores propusimos un seguimiento analítico del Estallido Social, marcando etapas, hitos relevantes, actores y dilemas que enfrentó el movimiento social y ciudadano.⁴ Esta vez, quisiéramos aventurar una mirada analítica más global y algunas hipótesis sobre el eventual desarrollo del movimiento social y ciudadano chileno.⁵

- a) En primer lugar, el Estallido y la movilización siguieron derroteros poco frecuentes en la historia política chilena. Se desarrollaron sin un convocante central, sin orgánicas previas nacionales, y sin partido políticos como conductores. Para viejos militantes del pasado, esta situación fue vista como la mayor debilidad del movimiento, quienes pronto sentenciaron: está muy bien la movilización, pero “carece de conducción”. Sin embargo, en la vereda opuesta, se puede sostener que esta ha sido su principal fortaleza, en el sentido que el propio pueblo auto convocado iniciaba un camino para constituirse en sujeto político colectivo. ¿Era esto posible? Todo indica que se puede responder afirmativamente. En su propio desarrollo, el movimiento reconoció que “movilizarse” y ocupar la calle era fundamental; también admitió que debían generarse nuevas organizaciones y comenzaron a multiplicarse las Asambleas Territoriales, Encuentros y Cabildos; y en este contexto, se ampliaron y diversificaron las “conversaciones” de todo tipo y en todos los lugares. Se comenzó a conversar y debatir sobre las pensiones, los bajos salarios, la salud, la educación, el feminismo, el medio ambiente, la legislación laboral, etc. A veces, informalmente, en otros casos se generaban comisiones de trabajo que luego informaban a la Asamblea de sus resoluciones. ¿Existía un

² Paulo Freire. *Pedagogía de Oprimido*. Siglo XXI Editores, Argentina 2002, p. 98 (Primera edición, Tierra Nueva, 1970)

³ Me parece que esta consigna, tal vez se expresaba de otros modos en otros tiempos de nuestra historia política o era, francamente impensada por las generaciones sesentistas u ochenteras.

⁴ Mari Garcés, *Estallido social y una Nueva Constitución para Chile*. LOM Ediciones. Santiago, marzo de 2020

⁵ Ocupo con cierta amplitud la conceptualización referida al “movimiento social”. En la literatura especializada, “movimiento social” se le entendía como un actor específico, por ejemplo, el histórico movimiento obrero. Sin embargo, en los años 80 se reconoció una diversidad de nuevos actores: los grupos de DDHH; la Mujeres; los pobladores; el cristianismo popular liberacionista; etc. Entonces, se acuñó la noción de “nuevos movimientos sociales”. Hoy en día, tanto la prensa como en las ciencias sociales, se la comenzó a usar el concepto de “movimiento social” para una diversas de acciones colectivas que emergen de la sociedad civil, muchas veces con un contenido anti estatal. De este modo, al pueblo chileno movilizad, a partir del 18 de octubre, se le denomina, en muchos casos, como “el movimiento social”.

instructivo de cómo se organiza una Asamblea territorial? ¿Había partidos y ONG que conducían los debates? No, que sepamos, sino más bien auto organización y a medida que la Asamblea caminaba, se constituían pequeños equipos y colectivos que preparaban el próximo encuentro en la plaza del barrio o en un local comunitario reconocido. Empezaba a nacer una nueva generación de dirigentes/as algunos de los cuales empezaron a coordinarse en cordones territoriales” o zonas (no los viejos cordones industriales, pero recreando el concepto de “cordón”)

Se podría abundar más y reconocer que en ese proceso se fue instalando el tema del cambio de la Constitución, que fue ganando adeptos, se invitó a especialistas (abogados, historiadores) a quienes se consultaba e interrogaba en conversatorios abiertos, haciendo visibles las dudas, las dificultades y también la esperanza de que las cosas podían cambiar. En suma, en medio de la deliberación popular y ciudadana comenzó a emerger “el programa” del “movimiento social” chileno.

- b) En la misma medida que el movimiento social crecía el gobierno se debilitaba, y su recurso permanente fue la represión, primero en los barrios y grandes avenidas (las “anchas alamedas”) y luego en la Plaza Italia, re-bautizada como Plaza de la Dignidad. En los primeros meses (octubre- noviembre), la plaza se ocupó todos los días y allí surgió la “Primera Línea”, un grupo masivo y combativo de jóvenes, que, con improvisados “escudos”, abundantes piedras y una que otra molotov, bloqueaban el paso de Carabineros y hacían posible que la Plaza albergara diariamente a miles de manifestantes. Es necesario, agregar también, que las manifestaciones no solo se realizaban en Santiago, sino que a lo largo y ancho del país.⁶ Carabineros estimó a fines de noviembre de 2019, que se había movilizó 4,2 millones de chilenos.

La movilización popular, que se inició el 18 de octubre tuvo un componente de “violencia social”, que dio cuenta de la rabia, la frustración y el malestar acumulado, y que tendió a dirigirse en contra de objetivos claros y visibles: el Estado con los ataques al Metro y el capital, mediante saqueos a supermercados y farmacias.⁷ Esta situación, sumado a las movilizaciones en barrios, plazas y avenidas más la represión gubernamental que se incrementó en el tiempo, crearon un cuadro de inestabilidad social y política que alteró el funcionamiento regular del comercio, el transporte

⁶ Siempre las miradas se concentran y documentan más en Santiago. Viajé este verano hasta Concepción, Temuco y Puerto Montt y pude ver las señas materiales de la movilización en cada una de estas ciudades.

⁷ Sobre el tema de la violencia social, volveremos más adelante, cuando ingresemos, en la parte final, al análisis del movimiento social en la coyuntura de la pandemia. Se puede adelantar, sin embargo, que la violencia social en Chile, en diversos momentos de crisis, desde el campo popular se ha dirigido más en contra de la propiedad que de las personas.

público y la vida cotidiana de la ciudad de Santiago y de algunas capitales de provincias.

En ese contexto, los esfuerzos del gobierno por volver a la “normalidad” se frustraron, habida cuenta de su débil “agenda social”, su incapacidad de dialogar con la sociedad civil y el recurso permanente la represión, que provocó, hacia fines de noviembre, 26 víctimas fatales, 11 mil heridos, 350 traumas oculares y sobre 20 mil detenidos.⁸

Sin embargo, la presión social y el rechazo masivo a la represión que desestabilizaron al gobierno, no fueron suficientes para provocar la caída de Piñera, ya que cuando éste se encontraba al borde del colapso, se produjo el “acuerdo parlamentario” del 15 de noviembre de 2019. Es decir, la clase política chilena reaccionó corporativamente para conjurar la visible crisis en el Estado. En rigor, hizo un doble juego: por una parte, admitió la posibilidad de cambiar la Constitución, mediante la convocatoria a un Plebiscito –acogiendo de este modo la demanda ciudadana- y, por otra parte, buscó recuperar el control de Estado sobre la sociedad estableciendo control sobre los cambios que podría provocar el proceso constituyente.

Esta iniciativa corporativa de la clase política es clave en el proceso político chileno, ya que hace posible la “recomposición” del Estado en medio de la crisis política y social provocada por el Estallido y el desarrollo alcanzado por el “movimiento social”.

El movimiento social chileno ha tenido un claro componente anti estatal y un rechazo transversal a la clase política. No se trata necesariamente de un rechazo a toda forma de Estado, sino a la forma que tomó éste –como aparato político e institucional- luego de la dictadura de Pinochet, como Estado subsidiario y no garante de derechos, es decir, orientado y dependiente del mercado como regulador social y del desarrollo, al mismo tiempo que, como “estado gendarme”, es decir, protector del orden social fundado en la propiedad privada y la economía de libre mercado. El Estado chileno de hoy, en este sentido, es un Estado que se recrea en la dictadura para hacerse orgánico a las formas neoliberales que reorganizaron la economía y el poder social hegemónico de las elites económicas, políticas y militares (los denominados poderes de facto, cuando se inició la transición a la democracia). El Estado, en una sociedad de clases, es inevitablemente una producción social de los grupos dominantes, noción o perspectiva que se puede

⁸ Garcés, “Estallido...”, op, cit, p. 87.

matizar solo sí una vigorosa lucha democrática abre espacios a la inclusión y la participación de los grupos subalternos.

La transición a la democracia, se organizó recuperando parcialmente el estado de derecho, pero dando continuidad al modelo neoliberal tanto en la economía como en el aparato del Estado, asimilándose a este modelo el conjunto de los partidos y los políticos profesionales, hasta llegar a constituir un segmento (o “casta privilegiada”) que ocupó su lugar en la dirección y la gestión del Estado, con visible distancia de la sociedad.

El Estallido social se verifica en este contexto, pero, además, cuando el gobierno de turno se halla en manos de una alianza de derechas, que refuerzan los rasgos más conservadores y elitistas del Estado.

De este modo, hay que admitir, que el movimiento social tiene al frente un bloque social, económico, político y militar difícil de enfrentar y desestabilizar significativamente.⁹ En este sentido, el movimiento social no se puede pensar ni concebir en sus metas de cambio sin tener en cuenta a sus oponentes.

Y, para decirlo de manera rápida y esquemática, sus oponentes son los actores del “orden dominante”, tanto en el campo de la economía como del Estado: el empresariado nacional y transnacional (incluidos los medios de comunicación), las clases medias asimiladas y gestoras del modelo neoliberal (desde las altas magistraturas del Estado, incluidos los oficiales de la policía y las Fuerzas Armadas hasta los altos funcionarios en la gestión empresarial, gerentes y diversas categorías de profesionales), las Iglesias conservadoras, de variadas denominaciones; y, también, variados segmentos de la pequeña burguesía burocrática estatal y privada (desde gran parte de los profesores universitarios hasta importantes sectores de las denominadas PYMES).

Es verdad que este sector, denominado en Chile ABC1, representa aproximadamente el 10% de la población, pero concentra sobre el 60% del ingreso nacional. Su poder económico, político e ideológico no es menor. Su poder corporativo sobre el Estado es prácticamente total. Como ellos suelen declarar, su vocación por el “servicio público” es notable y persistente.

⁹ Un análisis de coyuntura preparado por el ex MAPU, ex Ministro de Aylwin y actual lobista, Enrique Correa, sostenía el 18 de febrero de 2020, que las bases de la economía y del Estado no habían sido afectadas por el Estallido y que, en consecuencia, era necesario priorizar en el “orden público”.

Por otra parte, desde una perspectiva de análisis de “correlación de fuerzas” no se puede ignorar que este sector ha conducido la sociedad desde la dictadura y con mayor amplitud y extensión desde que se inició la recuperación de la democracia, configurando un sentido común neoliberal, que favorece un individualismo asocial y una creciente mercantilización del conjunto de las relaciones sociales. Una ideología, en sentido amplio, fundada en la relación de medios y fines o de costo-beneficio, como si la vida social fuera un conjunto diverso de negocios o susceptible de ser concebidas como tales. La solidaridad social, en este contexto, solo puede ser concebida como filantropía, de los que más tienen, y de eventos como *la Teletón*¹⁰, que se constituye en un gran acto de unidad nacional.

El neoliberalismo como ideología de las clases dominante se convirtió en “ideología dominante de la sociedad” comprometiendo a variados sectores, incluido el campo popular al que por la vía del endeudamiento se le incluyó crecientemente en el mercado de consumo, que, con los años fue favoreciendo el desarrollo de un “emergente clase media” que entra y sale del mercado, según soplan los vientos de mayor o menor estabilidad económica.

- c) Pero, volvamos al hilo central de este ensayo, ¿Era posible resolver el impasse (o “empate catastrófico de fuerzas”), que se generó, previo a la pandemia sanitaria, entre el movimiento social y ciudadano y el Estado?

Esta es una pregunta difícil de responder, pero fundamental para el análisis político, antes de la crisis sanitaria y por qué no, después de la crisis sanitaria. El análisis político, más allá de sus límites, y en particular de quien escribe estas líneas, siempre *forma parte de las luchas políticas*.

No se trata de hacer “política ficción” (lo que pudo haber sido y no fue), sino de pensar críticamente la conformación del actual movimiento social y sus capacidades para modificar el Estado y sus actuales formas políticas.

Desde nuestro punto de vista, el movimiento social chileno hizo avances muy significativos como establecimos más arriba (letra a). Sin embargo, enfrentó al menos dos problemas que se mueven en una temporalidad distinta a la de la política tradicional: *el de su propia constitución y el de la unidad social y política del pueblo*.

¹⁰ La Teletón es una gran jornada televisiva, con grandes artistas invitados, de recolección de fondos para la atención de niños con diversas discapacidades, organizado por Don Francisco” (popular animador de TV) en alianza con empresas y bancos. La jornada suele durar un poco más de 24 horas, y es transmitida en cadena por los grandes canales de TV abierta.

El carácter procesual del movimiento social

El Estallido Social, como sostuvimos en sus inicios, dio lugar a una movilización social que carecía de una orgánica, un partido u otra forma de “convocante central” como había ocurrido otras veces en la historia de Chile. Este fue un movimiento de otra naturaleza, separado de las dinámicas del Estado, que emergió desde la sociedad civil y como protesta en contra del Estado, del gobierno, de la clase política y de la institucionalidad vigente. Pero, en segundo lugar, se trató de un movimiento que debía constituirse en la propia movilización, es decir, desde sus inicios ha tenido –y tendrá muy probablemente- un carácter *procesual*. No estaban prescritas ni las formas, ni el alcance, ni el programa, ni las metas de corto y largo plazo. Y, sin embargo, si se sigue su desarrollo, este *movimiento de la sociedad* fue capaz de ir generando, en grados diversos, consensos programáticos (pensiones, salud, educación, salarios derechos humanos, etc.) y metas políticas, una de las cuales fue tempranamente la del cambio de la Constitución Política del Estado.

En los pronunciamientos públicos y las dinámicas de algunos actores movilizados se pueden reconocer explícitamente estos avances. Sin embargo, más allá de estos logros, otro problema político relevante, es la manera en que estas aspiraciones de cambio se puedan materializar. Este es, por cierto, un problema mayor que, a nuestro juicio, implica tener en cuenta que *los tiempos* del movimiento social que son largos y multifacéticos, y que se relacionan con los modos en que el propio pueblo –que se fue constituyendo en *estado de asamblea*, en muchos lugares del país- procesa y re-elabora su propia historicidad, la de su emancipación, más de una vez enajenada por el Estado clasista y sus lógicas de dominación. En este último sentido, no hubo Asamblea o Encuentro donde se debatía sobre el momento político donde no se convocaba a la historia y la memoria para tomar posición y definir mejor cómo se debe enfrentar la coyuntura. Es que las luchas emancipatorias –con sus victorias y derrotas- no son nuevas en Chile y eso lo saben quiénes hoy se movilizan.

Consideremos, en primer lugar, la perspectiva histórica: a) La historia de Chile, en sentido amplio, es la historia de la lucha de clases (oposiciones, conflictos, disputas, motines, resentimientos, rabias acumuladas, etc.), aunque las clases no se hayan terminado de constituir como “clase para sí”, es decir con plena conciencia de su papel histórico;¹¹ b) La historia de Chile, al menos en el siglo XX, es la historia de la conflictiva relación entre el Estado y la sociedad civil, especialmente popular;¹² c) En

¹¹ Como consideró, el historiador británico, E.P. Thompson, la posibilidad de lucha de clases sin clases en su artículo, “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿lucha de clase sin clases? En: E.P. Thompson. *Tradición, revuelta y conciencia de clase*. Editorial Crítica, Barcelona, 1979. pp. 13-61

¹² Mario Garcés. *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile*, LOM Ediciones. Santiago, 2012. Ver Capítulo IV. Pp. 73-135

la historia de las luchas populares se ha vivido recurrentemente la tensión de si poner todas las energías en el cambio del Estado o en el cambio de la propia sociedad.

En la historia reciente, dos experiencias muy distintas, por cierto, que movilizaron al pueblo, fueron la Unidad Popular y la lucha en contra de la dictadura. En ambos casos, las tensiones entre el Estado y la sociedad se manifestaron agudamente de diversos modos.

En el caso de la Unidad Popular, el proyecto político de cambios se buscaba realizar en el Estado y desde el propio Estado, luego de que la alianza política de Izquierda ganara las elecciones presidenciales y accediera al Ejecutivo. Allende puso en marcha un vasto programa de reformas con bastante éxito el primer año de gobierno (Nacionalización del cobre, reforma agraria y constitución de un área de propiedad social). La Oposición, por su parte, usó el parlamento y los tribunales de justicia como lugares desde los cuales bloquear los cambios y al mismo tiempo constituyó un amplio movimiento social opositor. Desde el Estado y la sociedad, primero obstaculizó los cambios; luego generó estrategias semi insurreccionales (el paro de Octubre de 1972); más tarde apostó al derrocamiento legal (elecciones de marzo de 1973); y, cuando no alcanzó sus metas, puso en marcha una estrategia golpista, que culminó el 11 de septiembre.

La Unidad Popular, recurrió a los instrumentos legales que le confería el Estado y la ley para hacer las reformas y se apoyó permanentemente en el movimiento popular, que creció en medio del proceso de cambios. Sin embargo, cuando la Oposición instaló la crisis en el propio Estado, la UP tendió a replegarse, perdió iniciativa y comenzó a sufrir los efectos de su propia división para encarar la crisis social y política que se había instalado en el país. Debía reformular su estrategia de cambios sin abandonar el Estado, pero acogiendo los aprendizajes que emergían de la propia experiencia social, de la cual el “poder popular” era una de sus vertientes. Al no producirse los cambios requeridos, se desencadenó la tragedia, tanto en el sentido de la impotencia con que el golpe sorprendió a la izquierda como por el proyecto de transformación terrorista del Estado que impuso la centro derecha en alianza con los militares.

En las luchas en contra de la dictadura, la tensión entre lo social y lo político se manifestó en las distintas fases que tomó la resistencia, pero sobretudo la recomposición del tejido social popular y la emergencia de nuevos actores, tanto en la base popular como en las clases medias. Es sorprendente cómo en medio de una dictadura terrorista, el pueblo fue capaz de reencontrarse y generar iniciativas de oposición que se potenciaron y adquirieron visibilidad pública a partir de mayo de

1983, cuando se iniciaron las Protestas Nacionales. La Izquierda perseguida y en algunos casos, prácticamente aniquilada en los primeros 10 años de dictadura logró reconstruirse, aunque una vez más dividida, y buscó “dar conducción” a los diversos movimientos sociales en una perspectiva de “guerra popular” o de “rebelión popular de masas”. De alguna manera, con el componente “militar” buscaba subsanar su derrota de 1973, pero el problema, a estas alturas de la historia, no era prioritariamente “político militar”, sino político social, es decir, tenía que ver con el cómo la Izquierda contribuía a que el movimiento social se constituyera en un “sujeto político colectivo” capaz de desestabilizar a la dictadura y abrir paso a un proceso de recuperación de la democracia.

Lo que buscamos llamar la atención es que más que la conducción o la eficacia de la estrategia elegida, sin un pueblo capaz de ponerse en movimiento encarnando una “voluntad colectiva”, que sea también la expresión o desarrollo de nueva hegemonía, es decir “una dirección intelectual y moral” de la sociedad no es posible modificar sustancialmente ni el Estado y ni la sociedad.

La construcción de una nueva hegemonía es más que un acuerdo programático o un “pliego del pueblo” y mucho más que el sueño de una movilización radical que provoca en un solo acto de “rebelión de masas” el desplome del Estado capitalista y el cambio de la sociedad.

Cuando proponemos que el movimiento social chileno tiene un carácter procesual, buscamos hacer referencia a dos fenómenos, por una parte, a su heterogeneidad, que es un rasgo de nuestros pueblos latinoamericanos y, por otra parte, acerca de los procesos de elaboración política, filosóficas y epistémica de los nuevos movimientos sociales, en particular, el feminismo, el pueblo mapuche, los ambientalistas, los profesores y los estudiantes, así como los movimientos más históricos de trabajadores urbanos y campesinos.

En este sentido, los procesos de deliberación que se han generado en el “movimiento social” a través de las asambleas, cabildos y encuentros - y ahora mediante formas digitales- son todos procesos de elaboración que dibujan, maceran, verbalizan, nombran (o pronuncian el mundo como decía Freire) los contenidos asociados a una nueva ética ciudadana, que es un principio de elaboración de una nueva hegemonía. En este sentido, y admitiendo la perspectiva utópica necesaria de instalar, el nuevo proyecto de cambio de la sociedad será anti patriarcal, descolonizador, anti extractivista, del “buen vivir”, de economía solidaria, de educación pública y popular, con salud biomédica, pero también ancestral y comunitaria, de formas democráticas radicales, y de amplios entramados de responsabilidad social de Estado y de solidaridad social ciudadana.

Las posibilidades que abre el proceso constituyente que, la clase política ha buscado bloquear o establecer controles y límites, representa un campo de “oportunidades políticas” en el sentido de ocupar un espacio público en que se puedan visibilizar y expandir los nuevos contenidos de un proceso de cambio social. Insistimos, el proceso constituyente debe ser concebido como algo más que un programa político, aunque también debe contenerlo. Por su parte, la clase política buscará permanentemente controlar y limitar el ejercicio de la soberanía popular y ciudadana y recurrirá a nuevos “acuerdos nacionales” consensuados entre ellos mismos en nombre de la nación, pero sin consulta a la nación.

El carácter procesual del movimiento social *supone un ejercicio de escucha recíproca entre los diversos actores que dan forma al movimiento social*, en sentido amplio, de tal manera de encontrar los elementos en común, que hacen posible “la unidad de fines económicos y políticos” así como “la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no solo en el plano corporativo sino en un plano “universal” y creando de este modo la hegemonía de un grupo social fundamental...”¹³

El desarrollo de una nueva hegemonía, o si se prefiere de una “nueva dirección intelectual y moral de la sociedad” presupone el cambio cultural, que, en ciertos sentidos, precede al cambio político.

En nuestra experiencia nacional, se trata de comprender cómo la sociedad ha cambiado en su estructura de clases, las formas del Estado o la cultura del consumo, que han hecho emerger nuevas realidades como el actual sistema de pensiones o el deterioro de la educación y la salud pública, el trabajo informal y una ley laboral que inhibe la organización sindical, todo lo cual supone, ciertamente, cambios en el Estado que permitan dejar atrás el “estado subsidiario” para reemplazarlo por un Estado garante de derechos sociales. Para producir éstos y otros cambios se requiere reemplazar la actual Constitución, mediante un proceso constituyente genuinamente democrático.

Sin embargo, cambiar el Estado no cambia mecánicamente a la sociedad. En nuestro país, se requieren cambios en las relaciones sociales y de poder que se han establecido con los adultos mayores y su lugar en la sociedad; cambios en el sistema nacional de educación pública para que los profesores, padres, madres, apoderados y estudiantes sean actores y protagonistas en la definición de contenidos, métodos pedagógicos y el sentido y la función social de la educación, en todos sus niveles; en

¹³ Antonio Gramsci, *La política y el Estado moderno*. Ediciones Península, Barcelona, 1971. P 113.

el sistema de salud pública que no se le puede concebir si no en relación con las comunidades atendidas y en la redefinición del papel de personal de la salud; la política de vivienda popular supone constituir a los propios pobladores/as y sus organizaciones en interlocutores directos de los planes de vivienda estatal; una nueva legislación laboral debe restablecer y recrear los derechos de los trabajadores chilenos, acción impensada sin la voz y el protagonismo de los propios trabajadores; y una nueva relación con el pueblo mapuche supone el mutuo reconocimiento de autonomías y derechos como pueblos buscando superar prácticas coloniales racistas .

Pero, estos nuevos contenidos e iniciativas que puedan y que se requiere que emerjan de la sociedad civil, suponen también un cambio en la “cultura política nacional”. Este cambio, nos parece que se lo puede pensar, al menos, en dos direcciones; por una parte, en reconocer a la sociedad civil su *actoría política*, por ejemplo, el Colegio de Profesores es una organización social, pero al intervenir en las definiciones de la educación pública cumple con un papel político. Lo político, en este sentido en una sociedad en proceso de democratización no puede ser “monopolio” de los partidos políticos, sino que función y atributo de un conjunto de actores. Cuando los “asuntos de la polis” atañen a las mayorías, la política deber ser un asunto de mayorías.

Por otra parte, y a propósito de los partidos políticos, se trata de una institución que arrastra una prolongada crisis en Occidente y también en nuestro país. Se requiere de un largo ejercicio de revisión y autocrítica (se diría en la Izquierda) del modo en que se concibe el papel de los partidos políticos en la sociedad. Nos parece que hay que comenzar por admitir que partido es “parte”, con pretensiones de totalidad cuando encarna un proyecto de transformación social, pero aún en estos casos no es posible concebir al partido como “partido-estado” ya que cuando lo fue, en el caso en la Unión Soviética, ahogó e inhibió el desarrollo de su propia democracia interna y del conjunto de la sociedad. En la vereda opuesta, bajo las formas neoliberales del actual capitalismo, los partidos se han convertido en una suerte de aparatos de poder para la “gestión” del Estado al margen de la sociedad, renunciado a sus contenidos ideológicos propios y a sus capacidades para interactuar con la sociedad civil. El resultado, en el caso chileno, como indica Hugo Vilella, ha sido un “vaciamiento” ideológico y político de los partidos.¹⁴

El desafío consistirá en recrear un sistema de partidos al servicio de la sociedad en proceso de democratización. Ese será un largo camino que implica revisar

¹⁴ Hugo Vilella. El vaciamiento. En: www.ongeco.cl

socialmente las nociones del servicio y particularmente del ejercicio del poder prevaleciente, de carácter autoritario y patriarcal. Para la izquierda representa variados desafíos, y entre los más importantes, hacerse cargo críticamente de su propia historia, en particular de sus teorías y prácticas que contribuyeron a su derrotas; revisar su aparato intelectual y cognitivo a efectos de mejorar su comprensión de la sociedad, y en particular de las clases populares; modificar sus modos de relación con la sociedad civil y los movimientos sociales, reconociendo y valorando sus autonomías y contribuciones al cambio social y cultural.

La unidad social y política del pueblo

Ya hemos insinuado algunos de los problemas que supone alcanzar la unidad social y política del pueblo, una cuestión que no está separada del proceso de conformación del pueblo en sujeto político colectivo.

En nuestras tradiciones políticas, la unidad se lograba cuando se articulaba una alianza o una plataforma con actores de reconocida trayectoria pública. Esta opción, de hecho, se ensayó, en medio del Estallido, cuando se conformó *Unidad Social*, que agrupó a la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, NO + AFP, la Federación de Trabajadores de la Salud, y en algunas etapas, a 8M. Sin embargo, no fue suficiente ni prosperó. Se podrían reconocer al menos dos falencias para explicar por qué Unidad Social no alcanzó sus metas: Por una parte, su débil capacidad de representación, por ejemplo, la CUT no es lo que fue históricamente, y vastos sectores en movimiento, los jóvenes, las Asambleas Territoriales, los ambientalistas no estaban representados en esta alianza. Pero, por otra parte, Unidad Social, habida cuenta de su heterogeneidad, sus añejas tradiciones sindicales, sus compromisos políticos partidarios, no fue capaz de jugar un liderazgo significativo. No siguió el ritmo del movimiento social ni generó iniciativas suficientes y novedosas para jugar un papel de liderazgo.

La pregunta es: ¿Entonces qué? si no es Unidad Social, ¿quién articula al movimiento social? La respuesta no es sencilla, ya que es muy probable que, así como el movimiento social es procesual en su propia conformación, lo será también en la generación de sus propias formas de articulación y representación. Y, de nuevo aquí nos topamos con el problema del *tiempo*, en el sentido que hay que hacer un camino que hagan madurar y muy probablemente recreen las formas de representación, teniendo en cuenta que este es un problema político relevante, en el sentido que una representación es inevitablemente expresiva de un nuevo tipo de *relaciones de poder*. No es que haya que “inventar la pólvora” sino que toda forma de representación conlleva contenidos, formas y liderazgos de un nuevo grupo social, esa vez, del nuevo movimiento social chileno, heterogéneo, diverso, multifacético e

inédito en cuanto a su carácter democrático y auto convocado. Esta vez, no hay representación pre-escrita de antemano, como “la clase” “el partido”, “la vanguardia”.

Tampoco en Chile hay tradiciones como la del peronismo argentino, que, en cada nueva coyuntura crítica, se recrea, apelando a su historia, la memoria popular y a los liderazgos emergentes. Nuestra tradición sería “la izquierda y “la Unidad Popular”, pero ambas con derrotas débilmente elaboradas y, en consecuencia, incapaces de recrear horizontes emancipatorios. ¿Qué liderazgos puede surgir del Partido por la Democracia (PPD) y del Partido Socialista (PS) asimilados al orden neoliberal, de un Partido Comunista (PC) que busca ser oposición sin lograrlo o de un Frente Amplio, que al poco andar se rinde frente a la institucionalidad y los roles parlamentarios? ¿Y qué liderazgos pueden encarnar los colectivos más radicales, que sueñan con el derrumbe del capitalismo a partir de acciones expresivas que enfrentan en condiciones a veces heroicas, pero siempre desiguales a la policía?

La unidad social y política del pueblo habrá que comprenderla en una doble dirección, por un parte, como el proceso de intercambios y escuchas recíprocas entre los diversos actores (y movimientos sociales específicos), y, por otra parte, como el lugar que cada grupo vaya ocupando en la movilización social.

El intercambio y la escucha recíproca supone un ejercicio pedagógico gigante, cotidiano, paciente, que sume a la mayoría del pueblo para hacer crecer y configurar una efectiva “voluntad colectiva”. La movilización, en cambio, es un ejercicio más difícil de prever, pero estrictamente necesario de tener en cuenta, en el sentido que las movilizaciones sectoriales (de estudiantes, mujeres, pobladores, trabajadores, pueblo mapuche, jóvenes) pueden generar solidaridades y efectos sinérgicos, del mismo modo que movilizaciones masivas –de la mayoría del pueblo- pueden provocar cambios políticos muy significativos.

Es en estos contextos que, muy probablemente se irá cimentando la unidad del pueblo y generando las condiciones de articulación de formas de representación plurales y democráticas. Desde el punto de vista histórico, con logros y límites, en momentos culminantes de movilización social, se constituyeron Asambleas Nacionales, como la Asamblea Obrera de Alimentación, en 1918-19 y la Asamblea de la Civilidad, en 1986-87.

d) El movimiento social en el contexto de la pandemia del Covid19.

Nuestro análisis puede verse seriamente interrogado en el contexto de pandemia y la nueva coyuntura social y política que se ha venido generando. Ya adelantamos, parcialmente, la conducta del gobierno al inicio de este artículo, ahora buscaremos ocuparnos del movimiento social.

Lo primero, que parece necesario considerar es que la actual coyuntura es tremendamente cambiante y se mueve a una velocidad tal que hace que los datos de ayer resulten insuficientes para hoy. Más que en otros momentos, pareciera que *todo lo sólido se desvanece en el aire*.¹⁵

Resulta evidente, a estas alturas, que, en una primera fase, cuando estalla la crisis sanitaria y se establecen las primeras medidas de contención (suspensión de clases, cierre del comercio y declaración de estado de emergencia sanitaria, el 18 de marzo de 2020) se impuso inevitablemente el repliegue del movimiento social. El mes de marzo que se estimaba recrearía masivamente las movilizaciones -y que, en la primera semana, tanto los estudiantes secundarios como las mujeres el 8 de marzo así lo evidenciaron- se comenzó a diluir en la segunda quincena, cuando la pandemia obligó al confinamiento social.

Muchos pensaron que la pandemia le devolvía la iniciativa al gobierno y que sería su tabla de salvación. Algo de eso se produjo, sin embargo, las cosas no eran tan sencillas, ya que el gobierno muy pronto navegaría por aguas turbulentas que lo pondrían ante el permanente dilema de si privilegiar la salud de la población o la estabilidad de la economía. Sus estrategias, en consecuencia, debían desplegarse en paralelo, como estrategias de contención sanitaria y económico social, una ecuación nada de sencilla para las lógicas neoliberales.

Los resultados de ambas estrategias, hacia fines de mayo, se encuentran en el límite de su rendimiento. La sanitaria, con los contagios en aumento y el colapso del sistema de salud ad portas, y la económica social, en fase de revisión, por su escaso impacto o más bien mediocre eficacia para conjurar la recesión y el hambre en las poblaciones.

¿Cómo ha reaccionado el movimiento social ante este nuevo cuadro?

Nos parece que se han insinuado y se encuentran en desarrollo dos respuestas: la de la solidaridad social que emerge “desde abajo” y la protesta social que retorna tomando variadas formas, desde lo que un periodista ha denominado “la ola social digital”¹⁶, pasando por reiterados intentos de volver a las calles hasta la acción del narcotráfico que ensaya sus propias iniciativas.

Estas diversas formas de expresión social y ciudadana, tienen como telón de fondo la mayor visibilidad de una sociedad estructuralmente desigual y una subjetividad difusa en que conviven, la rabia y el miedo; el retraimiento y la solidaridad. Para la

¹⁵ Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto Comunista, 1848.

¹⁶ Juan Enrique Ortega, en Taller de Movimientos Sociales, 30 de abril de 2020. ECO Educación y Comunicaciones

mayoría de la sociedad y la opinión pública, la desigualdad es el dato fuerte y de fondo, que la pandemia ha puesto a la luz del día. La pandemia ha operado como una suerte de bengala social que hace visible al conjunto de la sociedad su propia estructura y conformación, sin mediaciones ni ocultamientos ideológicos. (En sus extremos, los pobres hacinados, amenazados por el hambre y desafiando la cuarentena para conseguir el sustento diario y los ricos que han roto el cordón sanitario de la región metropolitana, desplazándose en sus helicópteros con destino sus casas de veraneo).

La solidaridad social “desde abajo” se encuentra, en estos días en plena expansión, multiplicándose las Ollas Comunes (u Ollas Populares), pequeños proyectos de cooperativas, centros de acopio, tanto en Santiago como en provincias. La consigna que las ido expandiendo y en algunos casos coordinando, indica: “El pueblo ayuda al pueblo”. Estas iniciativas adquieren visibilidad en las redes sociales y se promueve la solidaridad invitando a la población y a los grupos medios a que hagan donaciones económicas para solventar los gastos de las Ollas o de reparto de alimentos.

La protesta social, como adelantamos, es más diversa y difícil de prever en su desarrollo. Lo que ocurre es que en la medida que las cuarentenas se fueron ampliando, desde algunas comunas a toda la Región Metropolitana, se comenzó a hacer visible el “hambre” en las poblaciones. El 18 de mayo de 2020, se produjo la primera manifestación de pobladores en la Comuna de El Bosque en el sector sur de Santiago. Estallaron las alarmas y el gobierno confirmó esa misma tarde que distribuiría 2,5 millones de cajas de alimentos. A la mañana siguiente en algunos municipios, en Quilicura y Valparaíso, los vecinos reclamaban la ayuda, que tomará tiempo para que sea distribuida.

El problema es el siguiente. Con un 30% de la fuerza de trabajo en condiciones de informalidad, es decir, de trabajo al día y muchos de ellos, en la calle, sin contrato ni seguridad social, coloca a los más pobres en una situación insostenible, a menos que el Estado vaya eficazmente en su ayuda. Eso lo sabe todo el mundo y el gobierno ha tenido que admitirlo. La lentitud y la debilidad del Estado para actuar genera un cuadro de inestabilidad, al principio de brotes de protesta que ya se ha reproducido en varias poblaciones, pero también de latencia y amenaza de un nuevo estallido social.

Los actores implicados en la protesta, hasta ahora son los pobladores, los jóvenes que encienden barricadas y se enfrentan con la policía, pero también los “narcos” que hacen su aparición al anochecer. En este contexto, la protesta no solo implica enfrentar a la policía, sino que podría recrear un cuadro de saqueos a negocios y supermercados. Este cuadro podría llegar a ser muy complejo, ya que el “orden

público” hoy no está solo en manos de Carabineros, sino que también de los militares. La represión que ha sido una tónica dominante del gobierno, desde el 18 de octubre de 2019, puede tomar nuevas formas, más crueles y masivas. Un elemento adicional, que hace aún más complicada la situación es el desarrollo de la propia crisis sanitaria, en el sentido que la tasa de contagios –del orden los 4 mil casos diarios- hace prever el colapso del sistema de salud tanto en Santiago como en las grandes ciudades del país, en especial, Antofagasta y Valparaíso. Si esto se llega a consumir, los enfermos no tendrán atención adecuada y al hambre se podría sumar una enorme presión sobre los hospitales y la muerte de los más pobres en sus propios domicilios. Se trata de un cuadro no deseable, pero que no se puede descartar completamente, y si se llega a configurar, la situación social y política se hará aún más inestable y explosiva.

Epílogo: El movimiento social en la post pandemia.

Más allá del curso de la crisis sanitaria y económico social actualmente en curso, el movimiento social tiene en su horizonte un campo de oportunidades políticas, que se articula en torno a la convocatoria a Plebiscito para cambiar la Constitución, que originalmente debió desarrollarse el 26 de abril pasado y que fue postergado para el 25 de octubre próximo.

No es posible prever en qué condiciones llegará la sociedad al 25 de octubre, pero si es verdad que en la medida que el “estallido social” precedió a la crisis sanitaria, los problemas del “largo plazo” ya quedaron instalados. Dicho de otro modo, la crítica radical al neoliberalismo no surge con la pandemia, sino que *la antecede* y la búsqueda y construcción de una salida política ya estaba en desarrollo, solo se interrumpió con la pandemia. Habrá entonces que encontrar las mejores maneras de “retomar las luchas allí donde se interrumpieron”.